

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL

Manizales, Caldas, trece (13) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

SENTENCIA N° 79

RADICADO: 2020-00154
PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE: MARIA DORIS FLOREZ MUÑOZ
DEMANDADOS: REINERIO MURILLO

Procede el Despacho a proferir sentencia anticipada de conformidad con lo establecido en el numeral segundo del inciso segundo del artículo 278 del Código General del Proceso, dentro del presente proceso.

ANTECEDENTES

La parte ejecutante, actuando por conducto de apoderado presentó demanda ejecutiva en contra de REINEIRO MURILLO, la cual correspondió por reparto a este Juzgado.

El libelo introductorio se fundamentó en los hechos que se sintetizan así:

El señor contra quienes se dirige la demanda, aceptó a favor del demandante el 07 de enero de 2006 una letra de cambio por valor de \$2.000.000 con fecha de vencimiento el 07 de enero de 2007.

El plazo se venció y el demandado no canceló la obligación, motivo por el cual iniciaron proceso ejecutivo en contra del deudor, el cual se terminó por desistimiento tácito el 19 de noviembre de 2010 por este Despacho Judicial.

Con fundamento en ello, la parte actora solicita de nuevo, se libre mandamiento de pago en su favor y en contra del demandado, por las sumas mencionadas.

A través de providencia del 23 de julio de 2020, se libró la orden en la forma solicitada por el ejecutante.

El demandado fue notificado a través de curador ad litem el pasado 19 de enero de 2021, concediéndosele el término de ley para contestar la demanda.

Encontrándose dentro del tiempo concedido, contestó la demanda y propuso como excepciones de fondo, la denominada “*Prescripción del título base de recaudo judicial*”, fundamentado en que la fecha de vencimiento de la obligación contenida en el título valor era 07 de enero de 2007 y por lo tanto, su prescripción al amparo del artículo 789 del Código de Comercio ya había acaecido.

Siguiendo con el proceso reglado, de las anteriores excepciones se corrió traslado a la parte demandante, el 12 de febrero de 2021, y estando del término de ley, presentó escrito pronunciándose frente a estas, argumentando en resumen, que al curador ad litem

le estaba vedado prestar la excepción de prescripción del título, toda vez que esto hace parte de un derecho intrínseco del demandado, y en ese sentido no puede invocar excepciones para la personal defensa de su representado, pues ello está reservado a la parte misma, facultad que por disposición legal no tiene el curador, de conformidad con el artículo 56 del C.G.P, respaldando su tesis, con el pronunciamiento del tribunal de Bogotá Sala Civil y el tratadista Luis Felipe Marín Charris, quienes exponen que las obligaciones del curador son restringidas, ya que solo pueden realizar actos procesales que no estén reservados a la parte, sin poder proponer excepciones que dispongan del derecho en litigio y en este caso, la prescripción, al tener que ser alegada por el deudor y no poder ser declarada de oficio, bien puede este reservarse el derecho a proponerla y en ese sentido, es una prerrogativa personalísima y que no puede ser sustentada por el auxiliar de la justicia.

Teniendo en cuenta que ninguna de las partes deprecó medios probatorios que deban ser practicados, el Despacho dará aplicación al numeral segundo del inciso segundo del artículo 278 del Código General del Proceso, en consecuencia procede dictar la sentencia respectiva, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

En el presente asunto están reunidos a cabalidad los presupuestos procesales de capacidad para ser parte, demanda en forma, competencia y capacidad procesal.

El proceso se ha tramitado regularmente, lo que permite decidir de fondo o mérito la cuestión debatida, puesto que el libelo introductor reúne los requisitos legales del ordenamiento procesal civil y, no comporta una indebida acumulación de pretensiones.

Este Despacho es competente para conocer de la acción planteada por el lugar de cumplimiento de la obligación y por la cuantía de la pretensión; las partes que intervienen en este asunto son personas naturales y jurídicas con capacidad para ser parte.

Se presentó como base para el recaudo ejecutivo, el título que se describe a continuación:

Letra de cambio sin número suscrita por el demandado a favor del demandante por un valor de \$2.000.000 pagaderos el 07 de enero de 2007.

El ejecutado Reinel Murillo a través de curador ad-litem, propuso las excepciones de mérito que denominó *“Prescripción del título base de recaudo judicial”* y descenderá entonces, esta funcionaria al estudio de esta. Veamos:

No hay duda frente a los requisitos del título valor ni nada se precisa con el fin de horadar el mismo, por lo tanto, se parte de la base que la letra de cambio proviene del deudor y constituye plena prueba contra él, tratándose entonces de un título que presta suficiente mérito ejecutivo por contener una obligación dineraria a favor de la parte ejecutante y en contra del demandado, según la preceptiva contenida en el artículo 422 del Código General del Proceso.

En principio debe decirse que el documento aludido constituye un título-valor, en tanto que por sus características satisface las exigencias especiales contenidas para tal efecto en el artículo 671 del Código de Comercio, así como las generales de que tratan los artículos 619 y 621 ibidem, lo que de suyo lo califica como válido para el ejercicio de la acción cambiaria, esto es, para el ejercicio de la vía ejecutiva no sólo por lo establecido en

el artículo 782 ídem cuando reza: “Mediante la acción cambiaria el último tenedor del título puede reclamar el pago: 1) Del importe del título o, en su caso, de la parte no aceptada o no pagada; 2) De los intereses moratorios desde el día de su vencimiento; 3) De los gastos de cobranza, y...” sino por lo estatuido en el artículo 793 ejusdem al disponer que: “El cobro de un título-valor dará lugar al procedimiento ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento de firmas...”.

A su vez el artículo 488 del C. de Pr. Civil, establece: “Títulos ejecutivos. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que ...”. (Se destaca por el juzgado).

De esta última norma podría concluirse que el mencionado documento no sólo es auténtico sino que, *per se*, constituiría título ejecutivo pues no existe duda que el mismo fue suscrito y/o aceptado por la parte contra quien se opone y, por lo tanto, comportaría prueba plena en su contra ya que no sólo proviene del demandado, sino que contendría obligaciones claras, expresas y exigibles -al menos a la fecha de presentarse la demanda- pues, especialmente, se encontraba de plazo vencido para ese momento y, por esa razón, en dicha oportunidad se extendió la correspondiente orden de pago.

En ese orden de ideas ningún inconveniente habría en cuanto al valor probatorio del documento anejo al libelo introductorio. Sin embargo, en lo atinente a su eficacia, subsigue el estudio de la excepción de fondo propuesta a fin de determinar si, a pesar de lo anteriormente dicho, podría ordenarse continuar con la ejecución planteada o, en su defecto, terminar la ejecución con la consecuente orden de archivo del proceso y condena en costas y perjuicios para la demandante.

Así entonces, dando un orden coherente a la decisión, lo primero que analizará el Despacho sobre la excepción propuesta, es la legitimidad que le asiste al curador ad-litem para proponerla en nombre del demandado, toda vez que al descorrer traslado del medio exceptivo, el abogado demandante precisó que al auxiliar de la justicia no tiene esa facultad de conformidad con el artículo 56 del C.G.P, afirma que su proposición es un derecho intrínseco del sujeto ejecutado, respaldando su tesis, con en pronunciamiento del tribunal de Bogotá Sala Civil y el tratadista Luis Felipe Marín Charris, quienes exponen que las obligaciones del curador son restringidas, ya que solo pueden realizar actos procesales que no estén reservados a la parte, sin poder proponer excepciones que dispongan del derecho en litigio y en este caso, la prescripción, al tener que ser alegada por el deudor y no poder ser declarada de oficio, bien puede este reservarse el derecho a proponerla y en ese sentido, es una prerrogativa personalísima y que no puede ser sustentada por el representante.

Sobre el particular, la curaduría ad litem es una curaduría especial y dativa, conferida por un juez específicamente para un pleito, con el fin de que una persona sea representada procesalmente (C.C., arts. 435, 443 y 583) y se defiendan sus derechos aunque no concorra dentro del proceso, garantizándole que no reciba un tratamiento desventajoso que origine algún quebrantamiento en sus derechos sustanciales controvertidos dentro del dossier.

En la Sentencia C-1091 de 2003, se indicó que “en el contexto del proceso ejecutivo, con la figura del curador ad litem el legislador garantiza a la persona ausente del proceso que sus intereses serán representados y defendidos.”

Como se observa, la figura del curador ad litem tiene por fin brindar representación al que no concurre al proceso – de manera inadvertida o intencionalmente – con el objeto de garantizarle su derecho a la defensa. De acuerdo con el artículo 56 del C.G.P, el curador *“está facultado para realizar todos los actos procesales que no estén reservados a la parte misma, pero no puede recibir ni disponer del derecho en litigio.”* Ello indica que el curador ad litem está autorizado para realizar todas las actuaciones tendientes a proteger los intereses de su representado, dentro de las cuales - para esta juzgadora- se encuentra la proposición de una excepción de mérito destinada a que se declare que la acción cambiaria ha prescrito.

No se comparten los argumentos del profesional demandante, porque como bien lo dijo la Corte Constitucional mediante sentencia T-299 de 2005 *“... proponer la excepción de prescripción de la acción cambiaria en favor de su representado no implica que el curador ad litem entregue, enajene, renuncie o limite un derecho de aquél, sino más bien que asume a fondo la defensa de los intereses de la parte que debe proteger. El Tribunal menciona algunas acciones que no puede realizar el curador ad litem – transigir, conciliar, confesar - para de allí deducir que éste no puede proponer la excepción indicada. Empero estos ejemplos no se aplican a este caso, pues todos ellos se refieren a decisiones que limitan el derecho del representado sobre el bien en disputa, situación diferente a la de este proceso, donde lo que el curador ad litem pretende es que se declare que la acción ya prescribió.”*

El artículo 2152 del Código Civil establece: *“La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales...” “Se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por la prescripción.”*

A su turno, el artículo 2153 ibidem indica: *“El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio.”*

De manera que, lo que se interpreta de los artículos antes descritos, especialmente el 2153 es la prohibición que tiene el administrador de justicia para declarar este fenómeno jurídico de oficio, y no se infiere, como pretende el demandante, que el curador no pueda proponerla; máxime teniendo en cuenta que el auxiliar de la justicia está llamado a representar los intereses del demandado y dentro esa labor se encuentra, presentar excepciones que favorezcan a su representado de acuerdo con su táctica defensiva.

También cita el demandante en su escrito, que una de las razones para que el curador ad litem no pueda presentar este tipo de excepción es que su representado bien podría haber optado por no alegarla, por interrumpir la prescripción o por renunciar a ella. Tampoco este argumento es admisible. Al respecto basta con manifestar que el hecho de que el curador ad litem proponga la excepción no significa que el demandado no pueda intervenir después para renunciar a alegarla en su favor.

Para finalizar, esta Judicial se permite citar un aparte de la sentencia T 299 de 2005 emitida por la Corte Constitucional, a través de la cual revocó la decisión del Tribunal de Bogotá – Sala Civil con la que construyó el demandante sus argumentos así:

“De todo lo anterior se concluye que el curador ad litem dentro del proceso que se analiza sí estaba facultado para proponer la excepción de prescripción de la acción cambiaria y que, por lo tanto, el argumento esgrimido en la sentencia del Tribunal es inaceptable. La

sentencia del Tribunal se fundamentó en una prohibición inexistente y de esta forma incurrió en una vía de hecho por defecto sustantivo....”

En consecuencia, al considerarse válida la estrategia de defensa asumida por el curador ad litem, procederá esta Agencia Judicial a estudiar de fondo la excepción de prescripción de la acción cambiaria propuesta, pues si bien el auxiliar de la justicia tiene la facultad para presentarla, no quiere decir ello que la misma prosperará, dado que, corresponde a este Despacho analizar las circunstancias del caso y decidir de conformidad así:

En cuanto a normas de derecho, serán premisas jurídicas del argumento del despacho las siguientes disposiciones del Código de Comercio:

“ART. 781. Acción directa y de regreso: La acción cambiaria es directa cuando se ejercita contra el aceptante de una orden o el otorgante de una promesa cambiaria o sus avalistas, y de regreso cuando se ejercita contra cualquier otro obligado.”

“ART. 784. Excepciones: Contra la acción cambiaria sólo podrán oponerse las siguientes excepciones:

(...) 10) Las de prescripción o caducidad, y las que se basen en la falta de requisitos necesarios para el ejercicio para la acción.”

“ART.789. Prescripción de la acción cambiaria directa: La acción cambiaria directa prescribe en tres años a partir del día del vencimiento.”

La prescripción de la acción cambiaria, como bien se sabe, es un modo de extinguir las obligaciones al que se llega por el transcurso del tiempo acompañado de la inercia o inactividad del acreedor. De allí que para su determinación deben evaluarse aspectos tanto objetivos como subjetivos, esto es, que no es comprobable con la simple lectura del instrumento contentivo de la obligación. En otras palabras, la prescripción aparece en su forma extintiva como una figura mediante la cual se sustrae el derecho a la acción cambiaria por el devenir de un tiempo determinado, o sea que dicho fenómeno conlleva la extinción de la acción cambiaria por no haberse ejercido en el tiempo señalado por la ley para cada título en particular.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia¹ tiene dicho sobre este tópico lo siguiente:

*“...8. Si bien el ordenamiento no ha definido de manera específica la prescripción liberatoria, **se ha entendido por ésta como el modo o la forma de extinguir los derechos y las acciones en general, por no haberlos ejercitado el acreedor durante el tiempo señalado por la ley.** De ésta noción, en armonía con el artículo 2535 del Código Civil, se infiere que concurren como presupuestos los siguientes: “a) Que haya transcurrido cierto tiempo; “b) Conducta inactiva del acreedor o titular del derecho; y, “c) Que el crédito y las acciones sean susceptibles de extinguirse por prescripción.*

*“9. El primer elemento de la prescripción liberatoria exige el **transcurso de determinado tiempo**, el cual principia a acortarse, según lo dispone la misma ley, “desde que la obligación se haya hecho exigible” (art. 2535 C.C.). De suerte que cuando media un plazo o una condición, sobre todo, de linaje suspensiva, como el crédito en estas condiciones no es exigible, la contabilización del tiempo y su punto de partida solo se sabrá cuando desaparezca las modalidades o se torne exigible.*

*“10. Respecto del segundo elemento consiste en el **no ejercicio del derecho por parte del acreedor**, como ya se anotó, tiene lugar en razón de la inercia del titular del derecho en reclamar. (...).*

¹ Sentencia del 25 de agosto de 1975, M. P. Dr. Alberto Ospina Botero.

“11. En relación con le tercer presupuesto de la prescripción extintiva, se tiene que **las acciones o derechos deben ser susceptibles de extinguirse por ese modo**. Porque, si bien, como norma general las acciones son prescriptibles, por excepción algunas no lo son, como la de reclamación del estado de legítimo (art. 406 C.C.), la de demarcación o deslinde (art. 900 C.C.), la de cerramiento (art. 902 C.C.), la de partición (art. 1374 C.C.), etc....”.

“...Empero puede darse el caso de que se sucedan ciertos hechos que impidan que la prescripción siga su curso natural y se consolide. En efecto, cuando se sale del silencio, se produce entonces el fenómeno jurídico de la interrupción de la prescripción. Este puede tener lugar, **bien por causa del deudor**, en cuyo caso la interrupción es natural, **ora por causa del acreedor**, en cuyo evento la interrupción es civil. Así lo pone de manifiesto la ley cuando expresa que la interrupción en la prescripción extintiva puede ser natural o civil, y que se está en presencia de la primera “por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente”, y que ocurre la segunda, “por la demanda judicial” del acreedor (art. 2539 C.C.). Por consiguiente, **si el deudor reconoce la obligación, si efectúa abonos a la deuda, si pide plazos, si ofrece garantías como la fianza o la hipoteca, etc., se produce la interrupción natural, por causa del deudor; en cambio si el acreedor rompe su inactividad y silencio entablando una demanda de cobro contra el deudor, se produce la interrupción civil, por causal del acreedor...**” (Negrillas fuera del texto).

La doctrina por su lado, tras referirse a los artículos 1625 y 2512 del C. C. y a la sentencia de la Corte Constitucional de fecha 25 de noviembre de 1993, refiere que:

“...el haberse reglamentado la prescripción en el Código Civil, podría conducir, con razón, a concluir que se trata de una institución de derecho sustancial. Y a igual conclusión podría llegarse, si se repara en que el artículo 2512 la define como un modo de “adquirir las cosas ajenas” y de extinguirse “los derechos ajenos”. Pues, por definición, los derechos pertenecen a la esfera del derecho sustancial. Pero, de otro lado, se deben tener en cuenta estas consideraciones. En primer lugar, tanto el artículo 2512 como el 2535 y los que le siguen, se refieren a las extinción de las acciones. Por qué?. Sencillamente, **porque realmente lo que se extingue es la acción y no el derecho en sí**. Así lo demuestran algunas razones fundadas en normas expresas...”². (Negrillas fuera de texto).

En el sub judice, si tenemos en cuenta que la fecha establecida por las partes en el instrumento cambiario para el pago de la obligación a cargo de la deudora fue el **07 DE ENERO DE 2007**, y que la acción cambiaria ejercida es la directa, con base en el Art.788 del C. de Co. podemos concluir, fácilmente, que la excepción de fondo propuesta está llamada a la prosperidad, como quiera que la acción cambiaria prescribió desde el día **08 DE ENERO DE 2010**, o sea tres (3) año después del vencimiento del título valor.

Ahora bien. Podría pensarse que en este caso operó alguno de los fenómenos para la interrupción de la prescripción de la acción cambiaria, sea civil, ora natural. Siendo ello así es del caso entrar a estudiar este tópico, de la siguiente manera:

1) En cuanto a la interrupción por el deudor o natural:

Afirma el demandante, que el obligado canceló intereses de mora hasta el 07 de enero de 2008 y en vista que no volvió a pagarlos ejecutó el valor pago del capital y los intereses de mora adeudados a través de un proceso ejecutivo.

A partir de esa manifestación, advierte el Despacho operó la interrupción natural del fenómeno prescriptivo, dado que el deudor reconoció, en un acto voluntario e inequívoco, de manera tácita la obligación contraída.

² Trujillo Calle Bernardo, DE LOS TÍTULOS VALORES, Tomo I, Parte General, Grupo Editorial Leyer, Undécima Edición, Págs. 448-449.

Así entonces, a partir del **08 DE ENERO DE 2008**, comenzó a contar nuevamente el tiempo de prescripción de la acción, reiniciándose su cómputo por el término de tres años como se ha venido explicando.

En ese sentido, la prescripción contrario a lo que se dijo en precedencia, correría a partir del **08 DE ENERO DE 2008** y por el término de tres años siguientes, es decir, ya no al tiempo posterior al vencimiento de la obligación sino al de la interrupción natural del fenómeno jurídico y; como no se prueban dentro del proceso otros pagos realizados con posterioridad ni se afirma por el ejecutante tal situación, la única manera de que el lapso prescriptivo empiece a contabilizarse nuevamente sería de manera civil como se estudiará a continuación.

2) En cuanto a la interrupción civil o por parte del acreedor:

Establece el artículo 789 del Código de Comercio que la acción cambiaria directa prescribe en tres (3) años, contados desde el vencimiento del título, más no contempla la figura de la interrupción de la prescripción, por lo cual, para el efecto debe acudir a las normas procesales en materia civil.

Analizando el caso concreto, se observa que:

El documento base de recaudo ejecutivo tiene como fecha cierta o determinada de vencimiento el 07 de enero de 2007, no obstante, teniendo en cuenta lo que se dijo en precedencia sobre la interrupción natural, esta empezaría a contar nuevamente desde que esta opere, esto es desde el 8 de enero de 2008.

El artículo 829-3 del Estatuto Mercantil precisa “Cuando el plazo sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día del correspondiente mes o año...” sin perjuicio de que si el plazo vence en día feriado “...se prorrogará hasta el día siguiente” y que “el día de vencimiento será hábil hasta las seis de la tarde...”.

De manera que al hacer el cómputo del término de prescripción de la acción cambiaria bajo los parámetros antedichos, éste concluyó el día **martes 11 de enero de 2011, a las 6.00 p.m.**, debido a que el 08 de enero de 2011 fue un sábado, esto es, un día inhábil, por lo que el vencimiento se posterga hasta el día hábil siguiente. Por lo tanto, hasta esa fecha y hora disponía el acreedor para promover la correspondiente acción ejecutiva para hacer valer el derecho derivado de la letra de cambio que tenía a su favor, derecho que aparentemente aprovecharía con la interposición de una demanda ejecutiva ante este mismo Juzgado, al parecer en el año 2008, según su exposición de hechos.

En virtud de lo anterior y al no tenerse certeza de lo dicho por el demandante, esta Juzgadora mediante auto del 04 de marzo de 2021 decretó como prueba de oficio:

“Se ORDENA que por secretaría de este Despacho Judicial, se allegue con destino a este proceso, certificación en la cual se indique si entre las mismas partes existió proceso ejecutivo anterior a este y para la ejecución del mismo título valor que reposa en estas diligencias. En caso positivo, indicará radicado, fecha de presentación de la demanda y del auto que libró mandamiento de pago en caso de haberse dado dicha orden. También precisará el estado de ese proceso y si fue terminado, por qué motivo y en que calenda.”

Como resultado de la misma, se obtuvo el expediente digitalizado (archivo 22 E.D), en el que se observó que efectivamente el 28 de agosto de 2009, la señora María Doris Flórez a través de apoderado judicial, radicó demanda ejecutiva en contra de Reinerio Murillo

para el cobro de la misma letra de cambio que hoy sirve como título valor dentro de este asunto.

En aquella oportunidad se libró mandamiento de pago el 31 de agosto 2009 en contra del demandado y se ordenó su notificación. Posteriormente, al no cumplirse con las cargas impuestas al demandante para notificar la demanda, el 19 de noviembre de 2010, se terminó el proceso por desistimiento tácito y se levantaron las medidas cautelares decretadas; decisión debidamente ejecutoriada y en firme.

Como bien se manifestó en precedencia, la Ley Comercial contempla el término de prescripción de la acción cambiaria, pero nada menciona frente a la figura de la interrupción de la prescripción, por lo cual, para el efecto debe acudirse a las normas procesales en materia civil, específicamente el artículo 94 del C.G.P. que reza *“la presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación al demandado...”* (subrayas propias).

En el sub lite, si bien es cierto el acreedor adelantó el proceso ejecutivo antes del vencimiento del término de prescripción, se demostró que esa presentación no tuvo la eficacia para interrumpir el tiempo de sanción, pues conforme a la norma en cita, tal hecho queda supeditado a que el mandamiento de pago se notifique al demandado dentro del de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación al demandante de dicha providencia al demandante, y en este caso no se logró la notificación del demandado y por si fuera poco, por la negligencia del ejecutante el proceso fue terminado por desistimiento tácito.

Finalmente, tampoco se observa un requerimiento escrito realizado al deudor directamente por el acreedor para interrumpir el término de prescripción, de acuerdo al inciso final del artículo 94 ut supra.

Así las cosas, habrá de declararse probada la excepción de *prescripción de la acción cambiaria*, y, en consecuencia, además de decretarse la terminación y archivo del proceso y la consecuente condena en costas a la parte demandante. No se fijarán agencias en derecho de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 numeral 7 del C.G.P.

Por último, se precisa que si bien se propusieron medios exceptivos, teniendo en cuenta que las partes no deprecaron medios probatorios que debieran ser practicados, procede este Despacho a dictar sentencia al tenor de lo rituado en el numeral dos del inciso segundo del artículo 278 del Código General del proceso, que al respecto dice:

“...En cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes eventos: ... 2. Cuando no hubiere pruebas por practicar. 3. Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa.”.

Por lo expuesto el JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES de Manizales, Caldas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de ***PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CAMBIARIA*** propuesta por el curador ad litem del demandado dentro del proceso ejecutivo que adelantó **MARÍA DORIS FLÓREZ MUÑOZ** contra **REINERIO MURILLO**.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración se ordena la **TERMINACIÓN DEL PROCESO**.

TERCERO: Se condena en costas y perjuicios a la parte ejecutante y a favor del ejecutado, las cuales se liquidarán por secretaría en el momento procesal oportuno. No se fijan agencias en derecho de conformidad a lo dispuesto por el artículo 48 numeral 7 del C.G.P.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

VALENTINA SANZ MEJÍA
JUEZ

JCB

Firmado Por:

VALENTINA SANZ MEJIA
JUEZ

JUEZ - JUZGADO 006 MUNICIPAL CIVIL DE LA CIUDAD DE MANIZALES-CALDAS

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **01104f95920a36687383f89c3eb6afb7c30b4984a67f00e8623adb7983222cee**

Documento generado en 13/05/2021 04:11:01 PM